



# Asamblea General

Distr. general  
10 de noviembre de 2014  
Español  
Original: francés

---

**Consejo de Derechos Humanos**  
**Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre  
la Detención Arbitraria en su 70º período de sesiones  
(25 a 29 de agosto de 2014)**

**Nº 33/2014 (Burundi)**

**Comunicación dirigida al Gobierno el 26 de junio de 2014**

**Relativa al Sr. Pierre-Claver Mbonimpa**

**El Gobierno no ha respondido a la comunicación.**

**El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos, que prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 24/7, de 26 de septiembre de 2013. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/16/47, anexo), el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la comunicación arriba mencionada.

2. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);



c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, y lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los derechos humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

3. Pierre-Claver Mbonimpa es un ciudadano burundés de 66 años. Topógrafo de formación, el Sr. Mbonimpa ha sido miembro de la Policía Aeronáutica y de Fronteras, y funcionario del Ministerio de Economía, así como Presidente de la Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues (APRODH). Es, según la fuente, uno de los más célebres defensores de los derechos humanos de Burundi y ha recibido el reconocimiento de la comunidad internacional y la sociedad civil por su actividad, como demuestra la concesión de los premios Henry Dunant, en 2011, y Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos, en 2007. Debido a su activismo, ha sido víctima de amenazas, intimidación y detenciones arbitrarias en 1994 y 1996, tras lo cual decidió crear la APRODH.

4. El 6 de mayo de 2014, como parte de sus actividades en la APRODH y sobre la base de sus propias investigaciones, el Sr. Mbonimpa denunció públicamente en el programa radiofónico Kabizi de la Radio Pública Africana la presunta distribución de armas a los miembros de la liga juvenil del partido en el poder y el presunto entrenamiento paramilitar de jóvenes civiles de Burundi (a los que se conoce como Imbonerakure) en el este de la República Democrática del Congo. Estas alegaciones, que el Gobierno considera "infundadas", dieron lugar a graves tensiones entre la sociedad civil y las autoridades de Burundi.

5. El día siguiente y el 12 de mayo de 2014, el Sr. Mbonimpa fue citado por la policía judicial, que le solicitó más información. Como resultado de estas declaraciones, durante las cuales el Sr. Mbonimpa mantuvo en todo momento una actitud de colaboración, un agente del Servicio Nacional de Inteligencia resultó implicado en la coordinación de las actividades de distribución de armas y entrenamiento paramilitar referidas. Posteriormente, al Sr. Mbonimpa volvieron a citarlo para el 14 de mayo de 2014, cita que se pospuso para el 19 de mayo de 2014.

6. En la noche del 15 al 16 de mayo de 2014, el Sr. Mbonimpa fue detenido en el aeropuerto de Bujumbura cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Kenya, y pasó una noche bajo custodia policial. La legalidad de la orden de detención es cuestionable, pues el Sr. Mbonimpa no se había negado a presentarse a la cita fijada para el 19 de mayo. Además, la orden viola los artículos 67 y 78 del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que se dictó sin que la policía hubiese siquiera remitido el caso a la fiscalía.

7. El 16 de mayo de 2014, tras un largo interrogatorio, la fiscalía imputó al Sr. Mbonimpa el delito de incitación a la desobediencia civil y difusión voluntaria de "rumores falsos destinados a alarmar a los ciudadanos y alentarlos a enfrentarse a los poderes públicos", amparándose en el artículo 602 del Código Penal y el artículo 579 del Código, que prohíbe los actos contrarios a la seguridad interna y externa del Estado. El Sr. Mbonimpa fue trasladado el mismo día a la prisión de Mpimba, situada en Bujumbura.
8. El 20 de mayo de 2014, el Sr. Mbonimpa fue sometido de nuevo a un largo interrogatorio por el fiscal, para completar la investigación. Según la fuente, si el Sr. Mbonimpa es declarado culpable, podría ser condenado a hasta ocho años de prisión y a una multa de 300.000 francos de Burundi (194 dólares de los Estados Unidos de América).
9. El 5 de junio de 2014, el Sr. Mbonimpa compareció ante el Tribunal de Apelación de Bujumbura, reunido en sesión privada.
10. La fuente añade que los indicios que apuntan a una detención arbitraria son numerosos. Considera que las acusaciones formuladas contra el Sr. Mbonimpa carecen de fundamento pues, ante todo, su primera misión como defensor de los derechos humanos es precisamente denunciar las presuntas violaciones. Para ello se ha basado en investigaciones pormenorizadas, cuyo contenido comunicó a la policía cuando le fue solicitado. Así pues, la fuente señala que los cargos presentados contra el Sr. Mbonimpa —la intención de perjudicar los intereses de Burundi— carecen de fundamento. Al contrario, con la difusión de esa información, el Sr. Mbonimpa pretendía alertar a las autoridades competentes para que pudiesen llevar a cabo una investigación detallada y efectiva. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna pesquisa al respecto ni se ha actuado contra persona alguna, aunque las acusaciones hayan sido corroboradas por otras fuentes en el terreno.
11. La fuente concluye que los cargos contra el Sr. Mbonimpa son completamente infundados y no resultan creíbles a tenor de los hechos, y que no existen pruebas que permitan demostrar su culpabilidad.
12. La fuente considera que la detención del Sr. Mbonimpa se inscribe en la categoría II aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo, ya que resulta del ejercicio de los derechos y libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Del mismo modo, señala la obligación positiva de defender a los activistas de los derechos humanos, en tanto que promotores y protectores de las libertades fundamentales.
13. La fuente considera que, dado que los cargos no constituyen un delito penal creíble, el Sr. Mbonimpa debe ser liberado de inmediato, como se hizo con otros actores de la sociedad civil.
14. La fuente agrega que la detención se produjo en un contexto de grave deterioro del estado de derecho en Burundi. En ese clima de menoscabo de los derechos humanos, otras figuras fueron también objeto de sanciones, como el Presidente del Colegio de Abogados de Bujumbura, Isidore Ruffyikiri.
15. La fuente solicita que se impida cualquier vulneración de la dignidad y la integridad del Sr. Mbonimpa, y señala que su encarcelamiento en las condiciones descritas no garantiza la protección de su seguridad y lo expone a otras violaciones graves de los derechos humanos, como el uso de la tortura y los malos tratos, contra los cuales el Estado debe adoptar medidas concretas, de acuerdo con la observación general N° 2 (2007) del Comité contra la Tortura.
16. Por otra parte, en su informe de julio de 2011, la Association burundaise pour la défense des droits des prisonniers formuló recomendaciones sobre la necesidad de reformar la prisión de Mpimba, cuyo nivel de hacinamiento es alarmante (4.000 reclusos en unas

instalaciones diseñadas para acoger a 800 personas). El centro presenta serias carencias en materia de salubridad y la promiscuidad de los internos es constante, lo cual fomenta la propagación de enfermedades y la violencia entre los reclusos. Estas condiciones exacerban los riesgos potenciales para la integridad física y psicológica y la dignidad del Sr. Mbonimpa, dada su avanzada edad.

17. La fuente pide la liberación inmediata e incondicional del Sr. Mbonimpa, a fin de proteger su integridad y su dignidad.

#### *Respuesta del Gobierno*

18. El 26 de junio de 2014, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno la información de la fuente y le solicitó que, a vuelta de correo, proporcionase información sobre la situación actual del Sr. Mbonimpa y aclarase qué bases legales justificaban su detención. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya proporcionado la información solicitada.

#### **Deliberaciones**

19. Tras haber examinado la comunicación de la fuente y, habida cuenta de su urgencia y de la importancia de proteger a los defensores de los derechos humanos, el Grupo de Trabajo estima que está en condiciones de emitir una opinión acerca del caso, sobre la base de las observaciones que se han realizado y de conformidad con el párrafo 16 de sus métodos de trabajo revisados.

20. En el presente caso, el Gobierno optó por no refutar las alegaciones de una presunta violación presentadas por la fuente. El Grupo de Trabajo ha establecido, en su jurisprudencia, cómo trata la cuestión de la prueba. Si la fuente informa de una presunta conculcación de las normas internacionales que constituye detención arbitraria, la carga de la prueba recae en el gobierno que desee refutar tales alegaciones. En este caso, el Grupo de Trabajo basó su opinión en las alegaciones de la fuente.

21. En efecto, en casos como el que nos ocupa, donde se recibe información presuntamente fiable en la que se señala que un reconocido defensor de los derechos humanos ha sido privado de su libertad acusado de delitos cuestionables, cuando la condena no se basa en pruebas fidedignas y cuando, en realidad, la persona en cuestión ha sido castigada por ejercer sus derechos fundamentales, corresponde al Gobierno proporcionar al Grupo de Trabajo las pruebas específicas sobre las que se basa la condena.

22. Preocupa al Grupo de Trabajo que la detención del Sr. Mbonimpa incumpliese, en particular, el artículo 9, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella. El Sr. Mbonimpa no fue informado de la acusación en su contra sino hasta el 16 de mayo de 2014, después de un largo interrogatorio de la fiscalía.

23. Puesto que el Sr. Mbonimpa cooperó plenamente con las autoridades, el Grupo de Trabajo considera que las irregularidades relacionadas con su detención complicaron y agravaron la situación de los derechos humanos.

24. El Grupo de Trabajo entiende que los cargos formulados contra el Sr. Mbonimpa se basan en su trabajo de defensa de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo considera que una parte de dichas actividades consiste en denunciar las presuntas violaciones de los derechos humanos vinculadas con la distribución de armas a los miembros de la liga juvenil del partido en el poder. La misión de un defensor de los derechos humanos abarca también una labor de información y protección de los ciudadanos frente al presunto entrenamiento paramilitar de jóvenes civiles de Burundi en la República Democrática del Congo. Además,

el Grupo de Trabajo opina que la única intención del Sr. Mbonimpa era esclarecer unos hechos especialmente graves.

25. Profundamente preocupado por los hechos, el Grupo de Trabajo considera que la detención de Sr. Mbonimpa atenta gravemente contra la protección de los defensores de los derechos humanos, cuya seguridad y dignidad son vulneradas cada vez con mayor frecuencia. El Sr. Mbonimpa, que ha recibido galardones como el premio Henry Dunant, en 2011, y el premio Martin Ennals para Defensores de los Derechos Humanos, en 2007, es un reconocido activista de los derechos humanos de la región. A raíz de sus actividades, fue detenido en 1994 y nuevamente en 1996, tras lo cual decidió crear la APRODH.

26. Además, el Grupo de Trabajo desea señalar que la interpretación y aplicación arbitraria de disposiciones legislativas —tales como el artículo 602 del Código Penal, que sanciona la incitación a la desobediencia civil y la difusión voluntaria de rumores falsos destinados a alarmar a los ciudadanos y alentarlos a enfrentarse a los poderes públicos, o el artículo 579 del Código, que prohíbe los actos considerados contrarios a la seguridad interna y externa del Estado— puede dar lugar a una represión injusta del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto. Así lo evidencia el caso del Sr. Mbonimpa.

### Decisión

27. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Pierre-Claver Mbonimpa es arbitraria y contraviene los derechos y libertades proclamados en los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los artículos 6 y 16 de la *Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos* y, por lo tanto, se inscribe en la categoría II aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

28. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar sin demora la situación del Sr. Mbonimpa. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la reparación adecuada sería poner en libertad al Sr. Mbonimpa inmediatamente y concederle una indemnización por los perjuicios derivados de su detención arbitraria.

[Aprobada el 28 de agosto de 2014]